Nuestros adictos

Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx

Reforma
25 de junio de 2008

La buena es que el gobierno de Felipe Calderón supera a su predecesor en la guerra contra el narco. La mala es la ínfima prioridad concedida a nuestros adictos. La conclusión es que seguimos sin una estrategia integral y ello acentúa la incertidumbre sobre el desenlace final.

De acuerdo con cifras oficiales, el negocio de la droga tiene un valor anual de 20 mil millones de dólares, 10 mil millones salen de las exportaciones a Estados Unidos; los otros 10 mil millones de las ventas en México que, según algunos, ya emplean a 250 mil personas. Enfrentamos un monstruo y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así lo reconoció en junio del 2007: el consumo "se desatendió en las últimas décadas y ahora tenemos que volcarnos a atender lo que es una realidad: que somos también un país de consumo".

No hace falta ser maestro de estrategia para ver la conveniencia de elaborar una estrategia integral y flexible que asigne los recursos humanos y financieros de acuerdo con las peculiaridades e importancia relativa de cada uno de los actores que participan en la galaxia de la droga: productores, traficantes, vendedores, proveedores de armas, sistemas de respaldo y logística, lavado de dinero, etcétera. Frente a ellos es tan necesaria la capacidad de fuego y la fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas como la coordinación entre instituciones y la generación de inteligencia que ubique el detalle en un marco teórico sólido. Por el tamaño del mercado doméstico es igualmente indispensable una política de salud pública apuntalada por campañas de comunicación masivas dedicadas a contener el incontenible avance de las adicciones. Y todo lo anterior teniendo como criterio de partida y retorno el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Hace 18 meses el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narco y la Procuraduría General de la República me proporcionó hace días unas estadísticas reveladoras y alentadoras. Si se toma al año y medio como medida, Calderón supera a Fox en cualquiera de los indicadores usados para medir la contienda: aseguramientos de drogas, dinero, armamentos, vehículos y aeronaves. Por ejemplo, mientras el de Guanajuato incautó 29 millones de dólares y 64 aviones; el michoacano ya lo superó en el mismo número de meses porque ya va en 260 millones de dólares y 263 transportes aéreos. Que Calderón supere a su predecesor no necesariamente significa que se esté ganando la guerra, aunque tampoco podemos minimizar estos logros que podrían consolidarse con la entrada de Washington al campo de batalla.

En cuestión de días el Congreso de Estados Unidos aprobará la Iniciativa Mérida liberada, ya, de esa rudeza que tan bien le sale a la potencia. Serán 400 los

millones de dólares que enviarán para colaborar en la guerra contra los narcos. Si se toman como criterio los presupuestos conocidos, el grueso de los fondos se dedicarán a apuntalar a las instituciones que combaten a los cárteles de productores y traficantes. Menos del 5 por ciento están pensados para enfrentar las adicciones. Resulta natural que a nuestros vecinos sólo les interese frenar la oferta que satura los sentidos y neuronas de sus adictos. Suena miope y contraproducente que nuestros gobernantes los imiten y se desentiendan, en la práctica, de lo que está sucediendo con nuestros adictos.

El gabinete de seguridad de Calderón aprobó una estrategia con cuatro ejes: recuperación de territorios y fortalecimiento de gobiernos locales; reestructuración de las policías y procuradurías de estados y municipios; operativos conjuntos Federación-estados; y unidad social. Nuestros adictos no están entre las prioridades máximas de los gobernantes mexicanos, pese a representar un mercado de unos 10 mil millones de dólares y tal vez 250 mil personas.

Van algunos indicadores del ninguneo. En el 2007, el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) aseguró que por cada peso destinado a prevenir el consumo, se gastaban 16 en combatir la oferta. Según un informe de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Calderón transmitió, en sus primeros cinco meses, 732 mil 886 mensajes sobre el combate al narco; ninguno estuvo dedicado a frenar el consumo.

Estaría finalmente la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), un instrumento indispensable para medir el avance del consumo... y del narcomenudeo. Desde 1988 aparece cada cinco años con el sello de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Seguimos utilizando las cifras del 2002 porque en el 2007 no se hizo. Apenas hace unos días el secretario técnico del Conadic, Carlos Rodríguez Ajenjo, informó que la ENA fue levantada hasta febrero del 2008 en 48 mil hogares y anticipó que será hasta julio próximo cuando se den a conocer los primeros resultados (La Jornada, 6 de junio del 2008). Incomprensible el poco interés porque, además de que estamos ante un grave problema de salud pública, los adictos son reclutas potenciales de los escuadrones de sicarios y contribuyen a las estadísticas delincuenciales.

En la guerra contra el narco hay avances y éstos deben reconocerse porque son inaceptables las mezquindades cuando está en juego la seguridad nacional. Las cifras sugieren mejorías en la coordinación institucional y en la capacidad operativa del aparato de seguridad. La debilidad mayor sigue estando en ese menosprecio hacia los adictos mexicanos lo que reconfirma el desinterés de este gobierno por los derechos humanos. El hecho también representa una cruel paradoja: con la estrategia actual el gobierno mexicano está haciendo más por los adictos estadounidenses que por los de su propia nacionalidad. El absurdo como política de Estado.

La Miscelánea

Por mi columna del 18 de junio ("Gachupinerías"), María Elena Pérez Jaen, comisionada del InfoDF, me envió una información útil para quienes están hartos de esas llamadas de vendedores a casa. Para el blindaje total hay que inscribirse en dos programas. El Registro Público de Usuarios (Reus) de la Condusef ampara frente a las instituciones financieras y debe hablarse al 01 800 999 8080 -los defeños al 53 400 999 o en www.condusef.gob.mx. El Registro Público de Consumidores (RPC) de la Profeco es para frenar a las otras empresas y se tiene que marcar desde el número que se quiera proteger al 96 28 00 00 en el DF y al 01 800 96 28 000 del resto del país. Es gratis y da resultados.

* * * * *